

Allan BREWER CARÍAS

## DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y RÉGIMEN MUNICIPAL\*

### Resumen

El autor analiza el concepto de democracia participativa en el contexto de la descentralización política y de la municipalización. La democracia participativa no se puede plantear como sustituto de la democracia representativa. Ésta se puede perfeccionar con la inclusión de mecanismos de democracia directa (referendos) pero estos no pueden sustituir la representación. La verdadera posibilidad de participación política sólo puede darse a nivel de los municipios o gobiernos locales, cuando están colocados cerca del ciudadano como consecuencia de procesos de descentralización. Por ello, para que la democracia llegue a ser participativa, hay que descentralizar el poder, revalorizando el régimen local y el pequeño municipio rural. En definitiva, no habiendo autocracias descentralizadas, sólo las democracias se descentralizan.

\* Este texto tiene su origen en la Conferencia Inaugural dictada por el autor en el XXVI Congreso Iberoamericano de Municipios, convocado por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) y el Ayuntamiento de Valladolid, reunido en Valladolid (España) el 13 de octubre de 2004.

### Abstract

The author study the concept of "participatory democracy" in the context of the process of political decentralization and municipalization. Participatory democracy cannot be a substitute of representative democracy. Representation can be improved by means of direct democracy mechanisms, such as the referendums, but these cannot substitute representative democracy. The real possibility for a political participation is at the local (municipal) level of governments, when they are located near the citizen, as a consequence of a political decentralization process. That is why, for a democracy to be a participatory one, it is necessary to decentralize power, giving new value to local governments and to the small rural ones. In the end, only democracies can be decentralized; no decentralized autocracies exists.

### Palabras clave:

Democracia; Representación política; Participación política; Descentralización política; Gobierno local.

### Key Words

Democracy; Political representation; Political participation; Political decentralization; Local government.

Recibido: 31-03-2005

Aceptado: 30-08-2005

## I/ LA DEMOCRACIA Y EL DISCURSO AUTORITARIO

Si algo caracteriza la situación actual en América Latina es que ha comenzado a soplar como vendaval un muy falaz discurso neautoritario que supuestamente pretende sustituir la democracia representativa por una democracia participativa, como si se tratara de conceptos dicotómicos, y ello, contra lo que primero atenta es contra la propia democracia, contra la descentralización y contra el desarrollo local.

Esta llamada democracia participativa en el discurso autoritario, en realidad no es la que podría permitir y asegurar una efectiva participación política del ciudadano en la conducción de los asuntos públicos más allá del ejercicio del derecho al sufragio, como muchos quisiéramos, y como sólo la descentralización y municipalización pueden lograr. En realidad, en ese discurso autoritario, la democracia participativa de democracia sólo tiene el nombre, hábilmente utilizado por quienes se aprovechan de los fracasos políticos que han experimentado muchas de nuestras anquilosadas democracias meramente representativas y de partidos. Estamos en presencia de un engañoso *slogan* propagandístico, el cual, sin embargo —hay que reconocerlo— no deja de tener su atractivo.

Pero ese discurso, en realidad, lo que oculta es un feroz modelo de gobierno autoritario que creíamos superado en nuestro Continente, y que comienza ahora a aparecer envuelto en ropa de camuflaje con pintas populares y de legalidad, apoyado incluso por masas empobrecidas que reciben dádivas, pero sin que se genere riqueza ni empleo. Hay un neo populismo rico o petrolero rampante en América Latina, que reparte para lograr apoyos populares pero que no logra disminuir la pobreza, más bien la aumenta.

El discurso de la democracia participativa, sin duda, como lo hemos mencionado, es atractivo. Todos, alguna vez hemos usado la expresión “democracia

participativa” al criticar el funcionamiento de nuestras democracias, pero la verdad es que su uso político indiscriminado, la mayoría de las veces se hace sin que se sepa efectivamente de qué se trata y, en realidad, confundiendo indebidamente la democracia participativa con elementos de democracia directa o de asambleísmo popular inorgánico.

Otros en cambio, lo utilizan, pero con una clara y engañosa estrategia para acabar con la democracia como régimen político, paradójicamente alegando que hay que democratizarla aún más, explotando la popularidad de la noción que se origina en el malestar que ha derivado del ejercicio de la democracia representativa. Ésta, entre otros aspectos, ha provocado la desconfianza en los partidos políticos, que en lugar de intermediarios entre la sociedad y el Estado la verdad es que han mediatizado la voluntad de la primera y, además, ha originado la desconfianza en el propio Estado, al haber éste quedado controlado por aquellos, y tener sus estructuras e instituciones demasiado lejos del ciudadano.

En medio de esta confusión y de los discursos tanto democráticos como autoritarios que, a la vez y al unísono desde sus propias trincheras, claman por la democracia participativa para hablar de la participación, la democracia y el Municipio —todo lo cual es por esencia contrario al autoritarismo—, tenemos necesariamente que comenzar por replantearnos los principios básicos de la propia democracia y tratar de situar entonces el concepto de la democracia participativa donde le corresponde, que es precisamente en el ámbito local.

## II/ SOBRE LA DEMOCRACIA: LA REPRESENTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN

Sin duda, los dos principios fundamentales de la democracia en el mundo contemporáneo siguen siendo la representación y la participación. La primera, la

representación, si a algo se contraponen, es sin duda a la democracia directa: la dicotomía está, en este caso, entre la democracia representativa o indirecta, por una parte, y por la otra, la democracia directa (véase, en general, Aguiar de Luque, 1977).

El segundo principio, el de la participación, si a algo se contraponen es a la exclusión política, no a la representación. La dicotomía está aquí entre democracia participativa o de inclusión y democracia de exclusión o exclusionista. Y esto es precisamente lo que no se tiene claro cuando se habla de democracia participativa como "contrapuesta" a la democracia representativa: por una parte, desde las propias trincheras democráticas, queriendo en realidad referirse, sin saberlo, a los mecanismos de democracia directa; y por la otra, desde las trincheras autoritarias, confundiendo los conceptos para propugnar la eliminación o minimización de la representatividad y buscar establecer una supuesta relación directa entre el líder y sus estructuras de poder y el pueblo, a través de los mecanismos institucionales del Estado dispuestos para hacer creer que se participa.

### **1. La representación: la democracia directa y la democracia indirecta (representativa)**

En cuanto a la democracia representativa o democracia indirecta, esta es y seguirá siendo la esencia de la democracia. Su sustitución es imposible si de democracia se trata, sin perjuicio de que afortunadamente se haya venido enriqueciendo en las últimas décadas, precisamente, con la introducción en nuestros sistemas políticos de mecanismos de democracia directa que la complementan, pero que jamás podrán sustituirla. No puede existir en el mundo contemporáneo una democracia que sólo sea referendaria o de cabildos abiertos permanentes. Recordemos incluso que ni en la antigua Grecia existieron realmente sistemas que sólo fueran de democracia directa, donde las decisiones

supuestamente sólo se tomaban en asambleas, pues la conducción de los asuntos públicos realmente la hacían los magistrados, que si bien no siempre eran electos, sí eran designados por sorteo.

Pero lo cierto es que hoy por hoy, en casi todos los sistemas constitucionales contemporáneos se han incorporado mecanismos de consultas populares y de asambleas de ciudadanos con el objeto de complementar la representatividad. Además, todos los tipos imaginables de referendos, como los consultivos, aprobatorios, decisorios, abrogatorios, autorizatorios y revocatorios, los hemos ensayado; al igual que se han regulado las iniciativas populares. Todo ello, sin duda, ha contribuido a la movilización popular y a la relativa manifestación directa de voluntad del pueblo; pero es claro que esos mecanismos no pueden sustituir a la democracia conducida por representantes electos. Lo importante en este aspecto es asegurar que dichos representantes sean realmente representativos de las sociedades y sus comunidades, y sean elegidos mediante sistemas de sufragio directo, universal y secreto donde impere el pluralismo político, y a través de procesos electorales transparentes que aseguren el acceso al poder con sujeción al Estado de derecho, tal como lo establece la *Carta Democrática Interamericana* de la Organización de Estados Americanos.

### **2. La participación: la democracia de inclusión (participativa) o la democracia de exclusión**

Pero, sin duda, más interés contemporáneo tiene el segundo principio básico de la democracia, que es el de la participación política, el cual exige que el régimen democrático sea uno de inclusión política, donde el ciudadano sea parte de su comunidad política y pueda contribuir a toma de las decisiones que le conciernen.

Y hay que decirlo con claridad, participar —en realidad— es estar incluido, por lo que la dicotomía en este caso de la participación política se establece con la

exclusión política, que además conlleva la de orden social y económico, y con ello la marginalización.

Lamentablemente, sin embargo, en la doctrina política democrática con demasiada frecuencia se confunden los conceptos, y cuando se habla de democracia participativa se la confunde con los mecanismos de democracia directa, y se la reduce, por ejemplo, a las iniciativas legislativas, consultas populares, cabildos abiertos y referendos<sup>1</sup>. Sin embargo, la democracia participativa es mucho más que eso.

Participar, en efecto, en el lenguaje común, es ser parte de...; es pertenecer a...; es incorporarse, contribuir, estar asociado o comprometerse a...; es tener un rol en...; es tomar parte activa, estar envuelto o tener una mano en...; es, en fin, asociarse con...; compartir o tener algo que ver con... Por ello, la participación política no es otra cosa que ser parte de una comunidad política en la que el individuo tiene un rol específico de carácter activo conforme al cual contribuye a la toma de decisiones, y que no se puede agotar, por ejemplo, en el solo ejercicio del derecho al sufragio (que sin duda es una forma mínima de participación); o en ser miembro de sociedades intermedias, aun las de carácter político como los partidos políticos; o en votar en referendos (que también es otra forma mínima de participación).

Participación política democrática, por tanto, es estar incluido en el proceso político y ser parte activa del mismo, sin mediatizaciones; es, en fin, poder tener acceso a la toma de decisiones públicas. Y ello, en ninguna sociedad democrática se ha logrado permanentemente con referendos o cabildos abiertos. Estos son formas de participación, pero de carácter mínimo. Tampoco se logra con manifestaciones, así sean multitudinarias, donde la gente desfila blandiendo banderitas, criticando acerbamente o cantando o alabando obediente y

sumisamente a un líder. Eso no es participación política; eso no es más que manifestación política, que es otra cosa. Esa, la historia se ha encargado de enseñarnosla en todas sus facetas, incluyendo las propias de los autoritarismos fascistas. Incluso las manifestaciones pueden ser poco amistosas, de protesta, a veces furiosas y violentas. Pero lo que es cierto es que no se las puede confundir con participación política.

La democracia participativa, o si se quiere, para que la democracia sea inclusiva o de inclusión, tiene que permitir al ciudadano poder ser parte efectivamente de su comunidad política; tiene que permitirle desarrollar incluso conciencia de su efectiva pertenencia, es decir, de pertenecer a un determinado orden social y político, por ejemplo, a una comunidad; a un lugar; a una tierra; a un campo; a una comarca; a un pueblo; a una región; a una ciudad; en fin, a un Estado.

Se trata de lo que Norberto Bobbio denominó “el proceso de expansión del poder ascendente”, que amplía de la esfera de las relaciones políticas, y que pasa —decía— “de la esfera de las relaciones en que el individuo es tomado en consideración en su papel de ciudadano, a la esfera de las relaciones sociales, donde el individuo es tomado en consideración en una diversidad de estatus y papeles específicos, por ejemplo, como padre y como hijo, como cónyuge, como empresario y trabajador, como maestro y como estudiante; y también como oficial y como soldado, como administrador y administrado, como productor y como consumidor, como gestor de servicios públicos y como usuario” (Bobbio, 1992, p. 42).

Pero, por supuesto, el tema central a resolver cuando se trata de la participación democrática es determinar cómo y en qué lugar ésta puede realizarse. Como lo advirtió Giovanni Sartori: “O el autor de la democracia participativa se decide a clarificar positivamente dónde está lo que corresponde a cuál participación (de

1/ Véase el importante discurso de incorporación como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales del profesor Humberto Njaim, sobre el tema de La democracia participativa, Caracas, marzo 2005.

cuál naturaleza) y en cuáles lugares (¿en todas partes?), o nos quedamos con un animal que no logró identificar". Sobre ello, agregaba: "mucho ruido, es cierto, también mucha polémica furiosa; pero queda la duda de que haya nacido algo nuevo" (Sartori, 1994).

### III/ LA DEMOCRACIA DE INCLUSIÓN (PARTICIPATIVA) Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL ÁMBITO LOCAL

#### 1. La participación como esencia histórica de la democracia

La verdad, sin embargo, es que la democracia participativa no es nada nuevo; ha estado siempre, desde los mismos días de las Revoluciones del Siglo XIX, en muchos países hoy con democracias consolidadas; allí, en el nivel más ínfimo de los territorios de los Estados, en las Asambleas locales, en los Municipios, en las Comunas. Lo que pasa es que no la hemos querido reconocer, e insistimos en confundirla con algunos instrumentos de democracia directa.

Por ello el gran problema de la democracia contemporánea, y particularmente el problema de sus líderes y conductores —comenzando por los de los partidos políticos— es que a veces no entienden —o mejor, no han querido entender— qué es, efectivamente, participar en política, y dónde es que se puede realmente participar. Así, en el ámbito de los demócratas, con gran frecuencia la democracia la hemos reducido al ejercicio político del voto, de elegir o de ser miembro de partidos políticos; y es que toda participación, sin duda, complica el control férreo que los partidos políticos han desarrollado respecto del proceso político. No olvidemos que muchas democracias contemporáneas han funcionado conforme al principio del centralismo democrático el cual también sirvió, en su momento, a las democracias que en 1989 desaparecieron con la caída del muro de Berlín.

En el ámbito de los neautoritarismos, por otra parte, donde con frecuencia se blande la bandera de una supuesta "democracia participativa" para rechazar la

democracia representativa, en realidad no se concibe otra forma de "participación" que no sea la que deriva de la relación directa entre líder y pueblo, signada por la órdenes y consignas del primero y la obediencia y sumisión del segundo. Eso, por supuesto, tampoco es participación política; es un engaño y una sustitución autocrática de la voluntad popular.

Por su parte, los líderes de los partidos políticos, con harta frecuencia, han concebido la participación política como un monopolio de estos mismos, que por ello adquieren un supuesto derecho de mediatizar totalmente la voluntad popular, sustituyéndola y apoderándose de ella, y excluyendo de la vida política a quienes no son miembros de los mismos.

En las sociedades democráticas avanzadas, en cambio, la participación está en la corriente sanguínea de la propia democracia, por lo que incluso quienes la ejercen y la viven cotidianamente no se dan cuenta de ella; no le prestan atención y por ello, a veces no se la logra identificar. Como sucede en las democracias europeas, que son democracias inclusivas, pero a veces se piensa que ello es así, naturalmente, cuando no es cierto.

#### 2. La participación ciudadana y el ámbito local (municipal)

No olvidemos que esto lo descubrió para Europa Alexis de Tocqueville, cuando precisamente se topó con el régimen local asambleario que funcionaba desparramado en todo el territorio de las colonias inglesas en la costa este de Norteamérica, con su libro *La democracia en América*, democracia que hervía en los *Town Halls* (de Tocqueville, 1973, pp. 79 y ss.). Esas instituciones comunales "son a la libertad lo que las escuelas vienen a ser a la ciencia; la ponen al alcance del pueblo, le hacen paladear su uso político y lo habitúan a servirse de ella" (ibíd., p. 78). Y en Europa misma, esa democracia local fue uno de los productos más acabados y a veces incomprensidos de la propia Revolución

Francesa, lo que también fue advertido por el propio De Tocqueville en su otra clásica obra sobre *El Antiguo Régimen y la Revolución*, escrito veinte años después. Allí señala: "La administración local tiene un contacto diario con [los ciudadanos]; toca continuamente sus puntos más sensibles; influye en todos los pequeños intereses que forman el gran interés que se pone en la vida; es el objeto principal de sus temores y también el de sus esperanzas más queridas; los mantiene vinculados a ella por una infinidad de lazos invisibles que los arrastran sin que se den cuenta" (de Tocqueville, 1982, p. 15).

Y en efecto, dejando aparte y sin sustituir al sufragio y a los instrumentos de democracia directa, la participación política como democracia de inclusión en la cual el ciudadano puede tomar parte personalmente en un proceso decisorio, interviniendo en actividades estatales y en función del interés general<sup>2</sup>, sólo puede tener lugar efectivamente en los estamentos territoriales más reducidos, en el nivel local, comunal o municipal. Es decir, sólo en los niveles territoriales inferiores de la organización del Estado es donde se puede montar una organización participativa que permita la incorporación del ciudadano individual, o en grupos o en comunidades, en la vida pública, y particularmente en la toma de decisiones públicas generales o de orden administrativo.

Como lo señaló el ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, "La democracia moderna no se concibe sin audaces formas de participación ciudadana y comunitaria en el ejercicio del poder a nivel local y regional. Sin la garantía de que todas y todos pueden y deben participar en la preparación de las decisiones que se piensan tomar sobre temas de interés general, en su adopción y ejecución, esto último mediante el control que realicen sobre la gestión de las autoridades y los particulares que ejerzan funciones públicas. Sólo esas formas democráticas de participación le cambian la cara a las instituciones y permiten hablar de un nuevo régimen político" (Castro, 2003, pp. 201-202)<sup>3</sup>.

2/ Véase por ejemplo, en relación con la administración de justicia, Alberto González, 1997, pp. 76-77.

3/ Por ello, cabría preguntarse: ¿Por qué será entonces, que en un excelente libro reciente sobre *Las democracias. Entre el Derecho Constitucional y la Política*, de los profesores Olivier Duhamel y Manuel José Cepeda Espinosa, en sus más de 400 páginas donde los autores analizan los regímenes democráticos contemporáneos de Europa y América Latina, en la única página en la cual se habla y se usa la expresión de "democracia de participación" es en

Pero por supuesto, el tema central que se tiene que resolver cuando se habla con propiedad de democracia participativa es el de la determinación del nivel territorial que se requiere para la participación como cotidianeidad democrática, y la opción está entre el municipio desparramado en todos los rincones de un Estado, en cada villa, pueblo y caserío, situado bien cerca del ciudadano; o el gran municipio urbano o rural, situado al contrario bien lejos del ciudadano. Lo cierto, en definitiva, es que en la mayoría de los llamados países desarrollados democráticos predomina la existencia de muchos municipios, y entre ellos, de municipios pequeños: en Alemania, por ejemplo, de sus 16.098 municipios, 76% tiene menos de 5.000 habitantes; y en España, alrededor de 86% de sus más de 8.056 municipios, tiene menos de 5.000 habitantes, agrupando sólo 16% de la población, y 61% tienen menos de 1.000 habitantes (Sagawe 2003, p. 40). Debe destacarse, como un ejemplo de lo que significa para un país tener territorialmente muchos pequeños municipios, el caso de la Comunidad de Castilla y León, que alberga algo más de un cuarto del total de los municipios de España, con 2.248 municipios para 2.484.603 habitantes, de los cuales 68,5% (1.540 municipios) tienen menos de 500 habitantes (*Informe sobre el Gobierno Local*, 1992, p. 27). En contraste, por ejemplo, en Venezuela, con casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio y más de 24 millones de habitantes, sólo hay 338 municipios, con un promedio de población superior a los 70.000 habitantes.

## ■ IV/ EL CONTRASTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA

### 1. El tronco común del régimen municipal: la Revolución Francesa

En esta situación es donde está precisamente el contraste más espectacular en el constitucionalismo moderno, entre el régimen municipal europeo y, en particular de España, y el régimen municipal de los países iberoamericanos. Ambos fueron

relación con el sistema suizo? (Duhamel y Cepeda Espinosa, 1997, p. 56). ¿Acaso el régimen constitucional de Suiza, entre otros factores por la superficie incluso del país, no es el paradigma del federalismo y del régimen local o cantonal?

tributarios de los mismos postulados centrales que derivaron de la Revolución Francesa, pero la enorme diferencia entre ellos fue que desde comienzos del siglo XIX en Europa, el Municipio se ubicó en cuanto aldea, pueblo, villas y ciudad existían, bien cerca del ciudadano; y en cambio, en América Latina, el Municipio colonial que trasgó las batallas de la Independencia, continuó ubicado tal como se lo había creado, al nivel territorial de las antiguas Provincias coloniales, bien lejos del ciudadano. En los primeros, la participación política es tan cotidiana en las cosas pequeñas que es imperceptible; en los segundos, simplemente no hay participación alguna o hay muy poca.

Pero a pesar de las diferencias, los municipios de España e Iberoamérica, como casi todas las instituciones de derecho público, tienen un tronco común en los principios del constitucionalismo moderno derivados de las revoluciones norteamericana y francesa (Brewer-Carías, 1992; Brewer-Carías, 2004, pp. 223-333) que sustituyeron al Estado absoluto y que originaron la concepción del Estado de derecho. En ambos lados del Atlántico tomaron raíces al mismo tiempo, a partir de la finalización de las respectivas guerras de independencia, y siguieron cursos paralelos. Entre esos principios por supuesto estaba el principio de la igualdad, la madre de todos los principios del Estado moderno. Es la esencia misma de los derechos humanos; es el fundamento del principio de legalidad, en el cual la igualdad ante la ley tiene primacía, de manera que lo que nos hace iguales a los hombres es el sometimiento a la ley; y es el origen mismo de la Administración Pública, que como fue magistralmente analizado hace décadas por Eduardo García de Enterría, al estar sometida a la ley, es igual para todos sin privilegios y sin sociedades intermedias estamentales o poderes secundarios, a los cuales precisamente sustituyó tanto la estructura de la Administración centralizada como local para garantizar la libertad y la misma igualdad (García de Enterría, 1981, pp. 17, 41, 43, 46, 49, 50, 56). La creación de Municipios uniformes en todo el territorio de Francia, por tanto,

condujo a la sustitución definitiva de las cartas, fueros y privilegios locales. Como lo observó De Tocqueville, producto de la Revolución: "Las instituciones deben ser las mismas para todas las partes del territorio y para todos los hombres que las habitan" (1982, op. cit. Tomo II: pp. 99, 201). Pero hay que recordar que las reformas del régimen municipal en Francia puede decirse que precedieron la Revolución, con la creación antes de 1787 —por iniciativa de los ministros de Luis XVI— de las asambleas provinciales junto al Intendente y, en cada pueblo, de un cuerpo municipal electivo que sustituiría a las antiguas asambleas parroquiales, y en la mayoría de los casos, al síndico. Contrariamente a las costumbres que existían, todos los poderes que se pretendieron crear fueron colectivos, y el intendente fue disminuido en su poder. Todo ello condujo a la parálisis de la administración y, como lo apuntó De Tocqueville, "Las asambleas, queriendo mejorarlo todo, acabaron por enredarlo todo", produciéndose entonces "una de las mayores perturbaciones que haya registrado jamás la historia de un gran pueblo", en la cual "cada francés había experimentado una confusión particular. Nadie sabía ya ni a quién obedecer, ni a quién dirigirse"; y termina señalando, que "Perdido el equilibrio de las partes que componían la Nación, un último golpe bastó para hacerla oscilar y producir el más vasto trastorno y la más espantosa confusión que hayan tenido lugar jamás" (1982, op. cit., Tomo II: p. 197).

La Revolución quiso poner fin a esta situación, y en el mismo año de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente definió un nuevo orden municipal uniforme, fragmentado, generalizado y de carácter electivo el cual, en definitiva, si bien complicó aún más la situación de la Administración, puso las bases para el régimen municipal del constitucionalismo moderno. Comenzó el 4 de agosto de 1789, con un Decreto que declaró irrevocablemente abolidos "todos los privilegios particulares de provincias, principados, cantones, ciudades y comunidades de habitantes, sean pecuniarios o de cualquier otra naturaleza"

(cf. Vandelli, 1992, nota 10, p. 28) y al que siguieron los Decretos de 14 y 22 de diciembre del mismo año 1789. En el primero se dispuso la supresión y abolición de "las Municipalidades existentes en cada villa, burgo, parroquia o comunidad", con las denominaciones que tuvieran, y se agregó que serían sustituidas por "colectividades locales del reino" tanto en las ciudades como en el campo, con la misma naturaleza y situadas en el mismo plano constitucional, con el nombre común de municipalidad, que tendrían en su cabeza al alcalde.

En el segundo Decreto se dividió el territorio francés de manera uniforme en departamentos, distritos y cantones, fueron suprimidos los intendentes, y se dispuso que: "en cada villa, burgo, parroquia y comunidad del campo habrá una municipalidad" (Soboul, 1981, pp. 198 y ss.). De ello resultó que en 1791 en la Francia revolucionaria había 43.915 municipios que comenzaron a llamarse comunas. Estas entidades municipales, además de las funciones propias de la Administración general que les podían ser delegadas, ejercían el "poder municipal", concepto que venía de los escritos de Benjamín Constant y de las propuestas de reforma del ministro Turgot (1775) (cf. García de Enterría, 1981, pp. 72, 76, 135) y que luego se arraigaría en el constitucionalismo iberoamericano<sup>4</sup>.

Con esta división territorial, como lo percibió Burke en tiempos de la Revolución: "Es la primera vez que se ve a los hombres hacer pedazos su patria de una manera tan bárbara"; pero De Tocqueville acotaría años después que en realidad, si bien "parecía, en efecto, que se desagarraban cuerpos vivos, [...] lo único que se hacía era despedazar cuerpos muertos" (1982, op. cit. Tomo I: p. 107). Sin embargo, lo cierto es que el sistema produjo la disolución del Estado al haber estallado Francia en cuarenta mil pedazos, cada uno con una especie de república soberana y anárquica sin nexo alguno con el poder central en construcción.

## 2. De la anarquía a la organización piramidal del poder (el control de tutela)

De tal anarquía vinieron las reformas para tratar de controlar la acción municipal desde el poder central, como por ejemplo, al atribuírsele en la Constitución de 1791 poderes anulatorios al Rey, respecto de los actos municipales; al crearse en la Ley del 14 de frimario del año II (4 de diciembre de 1793) unos agentes nacionales directamente conectados al centro (París) para ejercer la vigilancia sobre los municipios; y además, al pretender reducir el número de comunas en la Constitución del año III (5 fructuoso, 22 de agosto de 1795), reagrupándolas en entidades locales, y estableciendo la subordinación de las comunas a las Administraciones departamentales, y de éstas a los Ministros.

Pero el torbellino revolucionario que no había cesado comenzó a producir su propia transformación con el golpe de Estado del 18 de brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), a raíz del cual Napoleón reimplantaría la centralización que se había establecido en el Antiguo Régimen y que había quedado destrozada con la Revolución. Se estableció, así, un esquema de control centralizado sobre las más de 40.000 comunas que fueron restablecidas, creándose un sistema escalonado y jerarquizado de control sobre las mismas, donde serían esenciales las figuras del prefecto y el subprefecto, dependientes del poder central y controlando a los alcaldes, establecidos en la Ley de 28 pluvioso del año VIII (17 de febrero de 1800) (véanse: Vandelli, 1992, pp. 29 y ss.; García de Enterría, 1981, pp. 107 y ss.; Morelli, 1991, pp. 31 y ss.).

La centralización administrativa por el establecimiento de esa rígida cadena institucional que unía Ministro, Prefecto, Subprefecto y Alcalde, y que dio origen al llamado control de tutela, sin duda fue uno de los aportes más importantes a la Administración municipal y local, y a la construcción misma del Estado centralizado. Como señalaría el presidente François Mitterrand casi doscientos

4/ En Venezuela, por ejemplo, aparece a partir de la Constitución de 1857, artículos 6 y 85 (cf. Brewer-Carías, 1997, pp. 467 y 475).



años después, al proponer la reforma descentralizadora de 1981: “Francia tuvo que acudir a un poder fuerte y centralizado para hacerse. Hoy necesita un poder descentralizado para no deshacerse” (citado por Jaime Castro, 2003, p. 26). Ésta, entre tantas, fue precisamente una de las motivaciones de la sanción de la conocida Ley francesa de Libertad de las Comunas de 1982<sup>5</sup>.

## V/ LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL NAPOLEÓNICO Y SU TRAVESÍA ATLÁNTICA

Tres principios configuraron el régimen municipal napoleónico: primero, el principio de la creación de un municipio por cada colectividad local —aún de dimensiones mínimas— abarcando desde el pequeño pueblo rural hasta el gran centro urbano; segundo, el principio de la uniformidad e igualdad formal del régimen de los municipios a pesar de la diversidad territorial, geográfica y demográfica de los mismos a lo largo y ancho de los territorios estatales; y tercero, las reglas generales de funcionamiento de la tutela, como instrumento de control sobre las entidades locales. Todo ello configuró un modelo de régimen municipal, sin duda, que se extendió por toda Europa (Vandelli, 1992, pp. 153 y ss.).

Hacia América, sin embargo, sólo hicieron la travesía del Atlántico algunos aspectos del régimen de municipalización uniforme, pero ni el primero ni el último de los principios —es decir, el de la generalización de colectividades locales en el territorio y el del control de tutela— llegaron a nuestras costas; y al contrario, desde el inicio del siglo XIX, no sólo el municipio se ubicó en niveles territoriales muy alejados de los pueblos sino que además, se implantó el principio de la autonomía municipal.

### 1. El principio de la multiplicidad de municipios en Europa y en particular en España

En cuanto al primer aspecto que es el que nos interesa destacar aquí, el de la

creación de un municipio por cada colectividad local que existiera en un territorio, con la consecuente fragmentación territorial, puede decirse que el mismo dejó su impronta en toda Europa y por ello, por ejemplo, en los años setenta, todavía existían 2.539 municipios en Bélgica, con una población promedio de 3.600 habitantes, los cuales después de la paradigmática operación quirúrgica realizada en el mapa municipal en 1972, fueron reducidas a 589 municipios, ahora con una población promedio de 16.900 habitantes por municipio. En Alemania occidental, aunque antes de la unificación los más de 24.000 municipios que existían, entre 1968 y 1980 habían quedado reducidos a 8.357 (Sagawe, 2003, pp. 42-43), actualmente existen 16.121 municipios, con un promedio de 5.086 habitantes. En Italia hay 8.104 municipios con un promedio de 7.156 habitantes; y en Suiza hay 3.000 cantones con 2.333 habitantes promedio (Vandelli, 1992, pp. 179; Brewer-Carías, 2001, pp. 139 y ss.).

En España, la influencia francesa en este aspecto también fue decisiva, por lo que la Constitución de Cádiz de 1812 dispondría en su artículo 310 que: “se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente”; correspondiéndole a los Ayuntamientos, sin embargo, desempeñar sus encargos bajo la inspección de las diputaciones provinciales (Art. 323). Todo el territorio español se sembró así también de municipios y ello explica los 9.245 municipios que Cirilo Martín Retortillo reseñaba en la edición de su recordado libro sobre *El Municipio Rural* (Martín Retortillo, 1950, p. 139), cifra que ha pasado a 8.056 municipios actuales, con un promedio de población de 4.825 habitantes. El municipio que derivó de la influencia francesa sustituyó así lo que quedaba del municipio de arraigo medieval, con sus fueros, privilegios y cartas-pueblas, particularmente en Castilla y León, con raíces en el proceso de la Reconquista. Esos fueron a pesar de su progresivo control por la Corona a partir del siglo XVI,

5/ Sobre la aplicación de la Ley del 2 de marzo de 1982, véase, en general, Terrazzoni, 1987.

por su arraigo en las ciudades— los que condujeron la guerra de Independencia contra la invasión napoleónica. El precio que pagaron por ello, en todo caso, en nombre de la igualdad, fue su uniformización y su multiplicación territorial.

## 2. El régimen municipal colonial en Iberoamérica: los cabildos provinciales

En Iberoamérica, el municipio colonial también fue el factor fundamental del proceso de Independencia frente a España, de manera que sin lugar a dudas se puede afirmar que también a comienzos del siglo XIX la Independencia americana la hicieron los Cabildos, de manera que el Municipio “fue la raíz de la República” (Gabaldón Márquez, 1977). Ese municipio también fue radicalmente transformado con el republicanismo constitucional, en forma paralela a la transformación que se estaba operando en la Península, al punto de que en la “Constitución para el gobierno y administración de la provincia de Caracas” de enero de 1812 —que formaba parte de la Confederación de los Estados de Venezuela creada conforme a la Constitución de diciembre de 1811 (ambas promulgadas antes de que lo fuera la Constitución de Cádiz de marzo de 1812)— se puede leer sobre la división del territorio de la Provincia uniformemente en Departamentos, Cantones y Distritos, debiendo tener estos últimos un territorio con aproximadamente 10.000 habitantes (Brewer-Carías, 1996, pp. 290 y ss.). En las capitales de Distrito se establecieron Municipalidades, así como en muchos de los pueblos entonces existentes, denominándose estas pequeñas municipalidades como villas. La municipalidad se concibió, así, inicialmente, más como una corporación local electa conforme al principio representativo para la atención de los intereses de la comunidad que como una división uniforme del territorio, por lo que con frecuencia tenían jurisdicción sobre otros pueblos y parroquias (Constitución Provincial de la Provincia de Caracas, 1959, pp. 77 y ss.). La uniformización territorial municipal fue posterior y paulatinamente arraigándose durante el siglo XIX en todos los

países iberoamericanos, pudiendo decir que el municipio en América también derivó, en cierta forma, de la influencia de la revolución francesa además de la norteamericana, y luego, por supuesto también de la Constitución de Cádiz. Fue así como se sustituyó al municipio colonial indiano, el cual, por lo demás era distinto del que en la época colonial funcionaba en España, pues como bien sabemos, la mayoría de las instituciones americanas antes de la Independencia fueron concebidas por España especialmente para América o se desarrollaron en el Continente americano en forma distinta a la de España. Ello ocurrió en cierta forma con los Cabildos, que en el mismo momento en que su poder y autonomía era pulverizada por Carlos V en campo de Villamar, al poner fin a la rebelión de los Comuneros de la tierra castellana, florecieron en América a partir del inicio mismo del poblamiento en lo que se ha denominado una “adaptación regresiva de las instituciones coloniales”<sup>6</sup>. Los Cabildos americanos en la época colonial, como cabildos provinciales, con la gran descentralización de que gozaron derivada de la distancia (recordemos la extraordinaria máxima administrativa colonial: “Se acata pero no se cumple”), incluso tenían poder para designar a los gobernadores en forma interina. Ese privilegio lo reclamaron los cabildantes en Santa Ana de Coro, la primera ciudad fundada en la Provincia de Venezuela en 1528 a la muerte del Gobernador Ambrosio Alfinger en 1533, y fue ejercida sucesivamente por los Cabildos provinciales durante todo el período colonial, confirmada por Real Cédula de 1560 y luego por otra Real Cédula de 1676<sup>7</sup>. No es de extrañar, entonces, por qué fueron los cabildos coloniales los que hicieron la Independencia.

## 3. El municipio republicano en América hispana alejado del ciudadano

El municipio republicano americano, por otra parte, desarrolló características propias: como dijimos, en nuestros países se adoptó el uniformismo napoleónico en cuanto a la organización y funcionamiento de las corporaciones locales, pero

6/ Laureano Vallenilla Lanz, *Disgregación e Integración. Ensayo sobre la formación de la nacionalidad venezolana*, 1953, citado por Joaquín Gabaldón Márquez, 1977, p. 66.

7/ El privilegio sólo lo perdieron los Cabildos a partir de 1737 (cf. Gabaldón Márquez, 1977, pp. 73-110; 125-169).

los otros dos principios que derivaron de la revolución francesa y sus correcciones napoleónicas puede decirse que no se siguieron. Por una parte, en América no arraigó la institución del control de tutela derivada de la centralización napoleónica, y en cambio sí germinaron los conceptos del “poder municipal” y de la “autonomía municipal”, al punto de haber adquirido, por ejemplo, rango constitucional a partir de 1857 en la Constitución de Venezuela de ese año al disponer en su artículo 6º que “el Poder público se divide para su administración en Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal”, dedicando entonces un Título a regular dicho “Poder Municipal” (Brewer-Carías, 1997, p. 475), cuyo contenido relativo a los asuntos propios de la vida local no era distinto al del Decreto de la Asamblea Constituyente en Francia, de diciembre de 1789.

El otro principio, el de la creación de un municipio por cada colectividad local, es decir, por cada caserío, por cada pueblo, por cada villa o ciudad, tampoco se siguió en América y de los viejos Municipios provinciales coloniales con territorios amplísimos se pasó a los alejados municipios republicanos, establecidos en ámbitos territoriales cada vez más y más alejados de los ciudadanos y de sus comunidades, con muy pocas excepciones.

Recordemos, en efecto, en contraste con los datos que antes mencionaba sobre la municipalización en Europa —e incluso tomando como referencia los 2.248 municipios de Castilla y León para sus 2.582.327 habitantes que tenía hace 20 años (1986), con un promedio general de algo más de 1.000 habitantes por municipio (para no poner como paradigma las 36.433 comunas francesas con un promedio de 1.614 habitantes)— que en nuestros países de América Latina la situación es más que dramática: en Argentina, para 37 MM de habitantes, hay 1.617 municipios con un promedio de población de 22.882 habitantes; en Bolivia, para 8 MM de habitantes, hay 312 municipios con un promedio de población de 25.642 habitantes; en Brasil, para 168 MM de habitantes, hay

5.581 municipios con un promedio de población de 30.102 habitantes; en Chile, para 15 MM de habitantes, hay 340 municipios con un promedio de población de 44.117 habitantes; en Colombia, para 42 MM de habitantes, hay 1.068 municipios con un promedio de población de 39.326 habitantes; en Cuba, para 11 MM de habitantes, hay 169 municipios con un promedio de población de 65.389 habitantes; en Ecuador, para 12 MM de habitantes, hay 1.079 municipios con un promedio de población de 11.121 habitantes; en El Salvador, para 6 MM de habitantes, hay 262 municipios con un promedio de población de 22.900 habitantes; en Guatemala, para 11 MM de habitantes, hay 324 municipios con un promedio de población de 33.950 habitantes; en Honduras, para 6 MM de habitantes, hay 293 municipios con un promedio de población de 20.478 habitantes; en México, para 97 MM de habitantes, hay 2.418 municipios con un promedio de población de 40.116 habitantes; en Nicaragua, para 5 MM de habitantes, hay 143 municipios con un promedio de población de 34.965 habitantes; en Paraguay, para 5 MM de habitantes, hay 212 municipios con un promedio de población de 23.585 habitantes; en Perú, para 25 MM de habitantes, hay 1.808 municipios con un promedio de población de 13.827 habitantes; en República Dominicana, para 8 MM de habitantes, hay 90 municipios con un promedio de población de 88.889 habitantes; en Uruguay, para 3 MM de habitantes, hay 19 municipios con un promedio de población de 157.894 habitantes; y en Venezuela, para 24 MM de habitantes, hay 338 municipios con un promedio de población de 71.006 habitantes (cf. Brewer-Carías, 2001, pp. 139 y ss.).

Lo que resulta más interesante de esta información comparativa es que ninguno de los países latinoamericanos, con todos sus enormes territorios y gran población, alcanza siquiera el número de municipios que por ejemplo, tiene sólo la Comunidad de Castilla y León, cuyos habitantes, además, a pesar de todos los

proyectos y esfuerzos que se han hecho por reducir o fusionar municipios, se han opuesto radicalmente a tales propósitos y a perder su personalidad municipal.

El municipio latinoamericano contemporáneo, al contrario, está en el otro extremo y en general ha adquirido un ámbito territorial tan alto y extraño al ciudadano que hace que no sirva ni para gerenciar adecuadamente los intereses locales ni para servir de instancia de participación política de la ciudadanía en la decisión o gestión de sus propios asuntos comunales.

## VI/ LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

### 1. La participación como fenómeno de la vida local

Y aquí volvemos a lo que nos motivó al inicio de este escrito: el tema de la democracia participativa está indisolublemente ligado no a la democracia directa, sino a la descentralización política y la municipalización, y la misma no se puede materializar sólo con propuestas de incorporación al régimen democrático de instrumentos como los referendos o las consultas o las iniciativas populares. La democracia participativa no se agota ni se puede confundir con la democracia directa, como suele suceder en muchos estudios sobre la democracia que propugnan su perfeccionamiento<sup>8</sup>.

La verdad es que para ubicar exactamente qué es la democracia participativa, lo que tendríamos que hacer, entre otras cosas, es preguntarnos: ¿por qué hay países que llamamos democráticamente desarrollados como los europeos, donde no se plantea con tanta urgencia la necesidad de la participación ciudadana y en los cuales precisamente impera la fragmentación municipal? En cambio, también tenemos que preguntarnos: ¿por qué en todos nuestros países latinoamericanos, que al contrario, tienen muy pocos municipios para sus enormes territorios estatales y su población, es donde sin embargo más se

grita al unísono contra nuestras insuficiencias democráticas clamándose a la vez por una democracia participativa?

La participación política como cotidianidad democrática o como parte de la democracia como forma de vida, sólo puede darse a nivel local. No hay otra instancia en los Estados; lo demás es falacia y engaño, o mecanismos de democracia directa. Por ello el tema, precisamente, no tiene tanta notoriedad en los países europeos, donde la participación es de todos los días, en las pequeñas cosas que pueden tratarse en esos pequeños municipios rurales como son precisamente los de Castilla. La participación local se tiene; está allí, diariamente, en la vecindad e, incluso, en los Consejos Abiertos que tan bien ha estudiado Enrique Orduña, con los cuales se gobiernan al menos los 419 municipios de la Comunidad de Castilla y León con población inferior a 100 habitantes, y que se ha mantenido a través de los siglos y de los regímenes políticos, habiendo encontrado incluso reconocimiento constitucional en 1978 (Orduña, 1994).

### 2. La participación, el localismo y la descentralización

La participación política o la democracia participativa están por tanto íntimamente unidas al localismo y a la descentralización, y ésta, a la limitación del poder, lo que es consustancial con la democracia. El régimen local es entonces, como lo ha señalado Eduardo García de Enterría, la estructura que "da curso al derecho ciudadano a participar en todos, completamente en todos los asuntos públicos que afectan a la propia comunidad"<sup>9</sup>; de manera que como ya nos lo advirtió hace más de treinta años nuestro muy recordado amigo Sebastián Martín Retortillo, cuando España aún no había entrado en el proceso de transición hacia la democracia, en aquella excelente obra que dirigió sobre *Descentralización administrativa y organización política*, al destacar las raíces eminentemente políticas del tema constataba que la participación efectiva del ciudadano común siempre presupone la descentralización<sup>10</sup>, de manera que sin

8/ Véanse por ejemplo, en Venezuela, los estudios publicados en Participación ciudadana y democracia, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE, 1998).

9/ Citado en "Introducción"; Martín Retortillo et al., 1973, p. LVIII.

10/ *Ibid.*, p. LIX

temor a equivocarnos podemos afirmar que no sólo sin descentralización política o territorial —es decir, sin que exista una multiplicidad de poderes locales y regionales— no puede haber participación política, sino que en definitiva no puede haber democracia participativa. La descentralización es, por tanto, la base de la democracia participativa y a la vez, el impulso de la democratización y control del poder. El centralismo, en cambio es la base de la exclusión política al concentrar el poder en unos pocos electos, y a la vez, el motivo del desprestigio de la democracia representativa. por más aditivos de democracia directa o referendaria que se le implanten.

Por ello decía en la conferencia sobre “El Municipio, la descentralización política y la democracia” que dictamos en el XXV Congreso de la OICI, en Guadalajara, en 2001, que “el debate contemporáneo en nuestros países por más democracia tiene que centrarse en el rescate del proceso de descentralización política. Perfeccionar la democracia exige hacerla más participativa y más representativa, para lo cual la única vía posible que existe es acercando el Poder al ciudadano, y ello sólo se puede lograr descentralizando territorialmente el Poder del Estado y llevarlo hasta la más pequeña de las comunidades; es decir, distribuyendo el Poder en el territorio nacional”. Y agregaba además, que “cualquiera que sea la forma de descentralización política, se trata de proyectos y propuestas contrapuestos radicalmente al centralismo de Estado y a la concentración del Poder, que son esencialmente antidemocráticos”. En definitiva, la propuesta política que entonces formulamos —y ahora insistimos en ratificar— “busca el diseño en nuestros países de un nuevo sistema político que la democracia exige, y que sólo puede tener por objeto hacerla más participativa con gran presencia de la sociedad civil, y más representativa de las comunidades. Ello implica desparramar el poder en todo el territorio, hasta la última de las comunidades, para que el ciudadano y sus sociedades intermedias puedan realmente participar” (Brewer-Carías, 2003, pp. 453 y ss.).

11/ Artículo 182, citado por Hernández Barrera, 2003, p. 108; véase también Hernández Becerra, 2001

### 3. La participación, el Municipio y la lugarización

Y ello implica, por sobre todo, la municipalización de los territorios de nuestros países para rescatar, más de doscientos años después, lo que fue la decisión terminante de la Asamblea Nacional Constituyente francesa en aquél diciembre de 1789, y que se traduciría hoy en nuestros países contemporáneos en la frase de que toda comunidad rural, todo caserío, todo pueblo, todo barrio urbano, debía tener su autoridad local como comunidad política, que llamaremos municipio conforme a nuestra tradición histórica. Como lo enuncia la Constitución de la Provincia del Chaco, en Argentina: “Todo centro de población constituye un municipio autónomo...<sup>11</sup>”.

Pero por supuesto, para ello, es decir, para una reforma política de esta naturaleza, tenemos que pensar en otro municipio, para no desparramar territorialmente la estructura burocrática local, mal y uniformemente concebida que tenemos en muchos de nuestros países y que lo que podría provocar es peor democracia. La diferenciación municipal, entonces, es consustancial con la municipalización como instrumento para acercar el municipio al ciudadano; porque como ya lo hemos mencionado más de una vez: “un municipio lejos de las comunidades y vecindades, como es en general el municipio en nuestros países latinoamericanos, materialmente no sirve para nada bueno, ni para la participación política ni para la gestión eficiente de los asuntos locales, ni por supuesto, para la democracia” (Brewer-Carías, 2001, pp. 127 y ss).

A nivel local, además, es donde florece la libertad en medio de la diversidad, y es donde en definitiva en un mundo cada vez más globalizado como el actual, el hombre, el ciudadano común encuentra su refugio e identifica el lugar de su pertenencia. Los hombres tenemos que terminar de constatar que en definitiva, frente a la incontenible tendencia hacia la globalización, que está allí y aquí, basada en lo transnacional y en la integración de los países, que produce ese

proceso de uniformismo personal, que desdibuja la singularidad de las personas o que despersonaliza al individuo, que todos captamos; frente a ello, se ha venido desarrollando en paralelo otra tendencia mundial pero hacia la lugarización, basada en el rescate de los "lugares", donde se identifica la singularidad de las personas, es decir, se vuelve a la persona, en su pertenencia a un lugar, donde se revaloriza lo "lugareño" y la vecindad. Eso lo han llamado los europeos regionalismos o localismos; pero como "lugarización" lo ha destacado magistralmente Francisco González Cruz, rector de una de las universidades privadas ubicadas precisamente en uno de esos tantos lugares del interior de nuestros países, en este caso, de la Universidad Valle del Mombay, en Valera, Venezuela. En un libro que tiene el sugestivo título *Globalización y lugarización*, editado precisamente "en la villa de San Roque de La Quebrada Grande", "su lugar" —como él señala—, define la "lugarización" como "todo proceso que revaloriza lo local"; y el "lugar", como "el espacio territorial íntimo y cercano donde se desenvuelven la mayor parte de las actividades del ser humano"; o la "comunidad definida en términos territoriales y de relaciones humanas, con la cual la persona siente vínculos de pertenencia. Puede ser una aldea, un pueblo, un barrio o un condominio. Siempre será, necesariamente, un espacio geográfico limitado en tamaño, de tal manera que la gente pueda establecer relaciones interpersonales" (González Cruz, 2001). Y allí, en definitiva, es donde se puede efectivamente participar desde el punto de vista político.

En todo caso, la organización política de la lugarización es la que precisamente y sin duda ha sido la característica fundamental del mapa municipal de Europa durante los últimos 200 años; es esa lugarización la que justifica los más de dos mil municipios de Castilla y León; y es esa abundancia de municipios, la que permite incluso racionalizarlos, por lo que algunos de los países europeos se han dado el lujo de reducirlos. En esto, por ejemplo, en las últimas décadas la

vanguardia la lleva Suecia: de los 2.500 municipios que tenía en 1943 pasó a 800 en 1952, y a 278 en 1974. Pero en nuestros países iberoamericanos, donde al contrario tenemos que multiplicar las autoridades locales, una política de reducción como ésta no sería otra cosa que un verdadero "genocidio municipal", como acertadamente Jaime Castro calificó el intento que se hizo en Colombia, en 2001, con el Proyecto de Ley 041/01, que proponía la desaparición de materialmente la mitad de los 1.067 municipios colombianos, aquellos que tenían menos de 14.000 habitantes, advirtiendo entre otras cosas, que en Colombia "los municipios son el Estado —la única presencia del Estado— en extensas y abandonadas regiones del país", por lo que lo que habría que hacer, al contrario, es "fortalecer y transformar el pequeño municipio [para] convertirlo en herramienta eficaz de una política de poblamiento territorial y de ocupación continua del espacio físico" (Castro, 2003, pp. 136-137).

De allí la enorme revalorización que requiere en nuestros países el tema del pequeño municipio rural, como parte del proceso de descentralización político-territorial, para asegurar no sólo la presencia del Estado en el territorio, sino para hacer posible la participación democrática, partiendo de la necesaria diversidad que deben tener las entidades locales; es decir, todo lo contrario al uniformismo organizacional.

Ese nuevo "Municipio lugarizado", como lo ha advertido Fortunato González Cruz, ex Alcalde de Mérida (Venezuela), debe ser apropiado a la realidad social y espacial que representa, con una organización municipal "heterogénea, adaptada a las necesidades de cada comunidad" y que dé origen a la necesaria diversidad municipal en el territorio; debe además tender a ser un "municipio sostenible por la propia economía local, de manera que su estructura burocrática y sus gastos ordinarios de administración sean pagados con ingresos propios" (González, 1998, p. 89).

## VI/ A MANERA DE CONCLUSIÓN: SÓLO LAS DEMOCRACIAS SE DESCENTRALIZAN (NO HAY AUTOCRACIAS DESCENTRALIZADAS)

En fin, lo que debemos concienciar es que no hay que temerle a la descentralización política, pues ello es un fenómeno propio de las democracias. No hay ni ha habido autocracias descentralizadas. Por ello sólo los autoritarismos temen y rechazan tanto la descentralización política como la participación democrática, incluyendo los autoritarismos que tradicionalmente nos han gobernado bajo el ropaje del "centralismo democrático" de cualquier cuño que sea, incluso de orden partidista.

No nos dejemos engañar con los cantos de sirenas autoritarios que no se cansan de hablar de democracia participativa, pero no para hacerla posible, sino para acabar con la democracia representativa, imposibilitando a la vez la participación. No nos confundamos los demócratas, al intentar dar respuesta a las exigencias políticas crecientes de participación democrática, con el solo establecimiento de paños calientes de carácter referendario o de iniciativas o consultas populares, que no la agotan en absoluto. En fin, no le tengamos miedo a lo pequeño, que territorialmente hablando es precisamente la lugarización, el pequeño municipio rural y la subdivisión municipal suburbana.

En definitiva, y para concluir, como dijo Santiago Ramón y Cajal, Premio Nóbel de Medicina en 1906, quien incluso tuvo la posibilidad de escribir un libro que tituló: *El mundo visto a los ochenta años*—ojalá todos pudiéramos llegar a tener esa misma visión—: "No hay cuestiones pequeñas; las que lo parecen son cuestiones grandes no comprendidas". Y eso es precisamente lo que ocurre con la multiplicidad de municipios y la cuestión que plantea: es más grande de lo que a veces creemos, porque en ello nos va la vida de la democracia participativa.

## BIBLIOGRAFÍA

AGUIAR DE LUQUE, Luís 1977 <i>Democracia directa y Estado Constitucional</i> , Editorial Revista de Derecho Privado, Edersa, Madrid.	BREWER-CARIÁS, Allan R. 2004 "El paralelismo entre el constitucionalismo venezolano y el constitucionalismo de Cádiz [o de cómo el de Cádiz no influyó en el venezolano]" En: <i>La Constitución de Cádiz. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino</i> , Unión Latina, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
BOBBIO, Norberto 1992 <i>El futuro de la democracia</i> Fondo de Cultura Económica, México.	CASTRO, Jaime 2003 <i>La cuestión territorial</i> Editorial Oveja Negra, Bogotá 2003.
BREWER-CARIÁS, Allan R. 1992 <i>Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno</i> . Editorial Jurídica Venezolana, Caracas.	"Constitución Provincial de la Provincia de Caracas" 1959 En <i>Las Constituciones Provinciales</i> Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1959.
1996 "La formación del Estado venezolano" En <i>Revista Paramillo</i> , N° 14, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal: pp. 290 y ss.	COPRE-Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 1998 <i>Participación ciudadana y democracia</i> Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Caracas.
1997 <i>Las Constituciones de Venezuela</i> Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.	DE TOCQUEVILLE, Alexis 1973 <i>La democracia en América</i> Fondo de Cultura Económica, México.
2001 <i>Reflexiones sobre el constitucionalismo en América</i> Editorial Jurídica Venezolana, Caracas.	1982 <i>El Antiguo Régimen y la Revolución</i> Alianza Editorial, Tomo I y II, Madrid.
2003 "El municipio, la descentralización política y la democracia". XXV Congreso Iberoamericano de Municipios, Guadalajara, Jalisco, México del 23 al 26 de octubre de 2001. Fundación Española de Municipios y Provincias, Madrid.	

<p>DUHAMEL, Olivier y CEPEDA Espinosa, Manuel José</p>	<p>GONZÁLEZ CRUZ, Francisco</p>	<p>MORELLI, Sandra</p>	<p>TERRAZZONI, André</p>
<p>1997 <i>Las democracias. Entre el Derecho Constitucional y la Política</i> TM Editores. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, Bogotá.</p>	<p>2001 <i>Globalización y lugarización.</i> Universidad Valle del Momboy. Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, Universidad de los Andes, La Quebrada. Valera, Venezuela.</p>	<p>1991 <i>La Revolución Francesa y la Administración Territorial en Colombia, Perspectivas comparadas.</i> Universidad Externado de Colombia, Bogotá.</p>	<p>1987 <i>La décentralisation à l'épreuve des faits</i> LGDJ, Paris.</p>
<p>GABALDÓN MÁRQUEZ, Joaquín</p> <p>1977 <i>El municipio, raíz de la República</i> Academia Nacional de la Historia, Caracas.</p>	<p>Hernández Barrera, Augusto</p> <p>2003 "Objetivos inéditos de la categorización municipal" En Villar Borda et al., 2003.</p>	<p>NJAIM, Humberto</p> <p>2005 Discurso de incorporación como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas.</p>	<p>VALLENILLA LANZ, Laureano</p> <p>1953 <i>Disgregación e integración. Ensayo sobre la formación de la nacionalidad venezolana.</i> Segunda edición, Caracas.</p>
<p>GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo</p>	<p>2001 <i>Ordenamiento y desarreglo territorial en Colombia</i> Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá.</p>	<p>ORDUÑA R., Enrique</p> <p>1994 <i>Democracia directa municipal. Concejos y Cabildos Abiertos.</i> Editorial Civitas, Madrid.</p>	<p>1984 <i>Obras Completas</i> (recopilación de Federico Brito Figueroa y Nikita Harwich Vallenilla). Ministerio para las Administraciones Históricas, Universidad Santa María, Caracas.</p>
<p>1981 <i>Revolución Francesa y administración contemporánea</i> Taurus Ediciones, Madrid.</p>	<p><i>Informe sobre el Gobierno Local</i></p>	<p>SAGAWE, Torsten</p>	<p>VANDELLI, Luciano</p>
<p>GONZÁLEZ, Alberto</p> <p>1997 "Participación en la Administración de Justicia" En Jorge Londoño U. (comp.) <i>Constitucionalismo, participación y democracia</i>, Librería Jurídica Ethos, Uniboyacá, Bogotá-Tunja.</p>	<p>1992 Ministerio para las Administraciones Públicas Fundación Carles Pi Sunyer d'Etudis Autonomics y Locals, Madrid.</p> <p>MARTÍN RETORTILLO, Cirilo</p> <p>1950 <i>El municipio rural</i> Bosch, casa Editorial, Barcelona.</p>	<p>2003 "La situación de los pequeños municipios en Europa: con especial referencia a la República Federal de Alemania" En Villar Borla et al., 2003.</p>	<p>1992 <i>El poder local. Su origen en la Francia revolucionaria y su futuro en la Europa de las regiones.</i> Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid .</p>
<p>GONZÁLEZ, Fortunato</p> <p>1998 <i>Un nuevo Municipio para Venezuela.</i> Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, Universidad de los Andes, Mérida.</p>	<p>1973 <i>Descentralización administrativa y organización política</i> Tomo I, Ediciones Alaguara, Madrid.</p>	<p>SARTORI, Giovanni</p> <p>1994 <i>¿Que es democracia?</i> Altamira Editores, Bogotá.</p> <p>SOBOUL, Albert</p> <p>1981 <i>La révolution française</i> Gallimard, Paris.</p>	<p>VILLAR BORDA, Luis et al.</p> <p>2003 <i>Problemática de los pequeños municipios en Colombia ¿Supresión o reforma?</i> Universidad Externado de Colombia, Bogotá.</p>